



Bogotá D.C,

Señor Juez

**ADRIANA DEL PILAR CAMACHO RUIDÍAZ**

JUZGADO TREINTA Y SIETE (37) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C - SECCIÓN TERCERA

E. S. D.

Proceso	110013336037 2024 00150 00
Demandante	ARMANDO SANCHEZ Y OTROS
Demandado	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Medio de control	REPARACIÓN DIRECTA
Asunto	CONTESTACIÓN DEMANDA

**EDWIN SAUL APARICIO SUAREZ**, mayor de edad, residente de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.090.389.916** de Cúcuta (N/Santander) y portador de la tarjeta profesional número **319.112** del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la **POLICIA NACIONAL**, de acuerdo al poder que se anexa, me permito **CONTESTAR LA DEMANDA** en los siguientes términos:

### I. A LA SITUACIÓN FACTICA

En su totalidad constituyen la apreciación subjetiva de la parte actora, por lo que deberán probarse por completo.

### II. A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Lo primero en advertir, corresponde a que la entidad pública que defiendo, se opone a la totalidad de las pretensiones formuladas por la parte demandante, ya sean estas declarativas, de interpretación, consecuenciales y/o de condena contra la demandada, basándome para ello en las razones de hecho y de derecho que se expresaran a lo largo del presente escrito de contestación, para ello inicio así:

**APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD:** La Constitución Política establece lo siguiente:

*“ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada..., fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Subrayado fuera del texto).*

*ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución...Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. (Subrayado fuera del texto).*

*“ARTÍCULO 218...el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz...”*

A su turno, el Decreto 2158 de 1997, por medio del cual se desarrolla la estructura orgánica de la Policía Nacional, en él se determina la visión, misión, funciones y principios de la gestión en la Policía Nacional<sup>1</sup>, donde se establece:

<sup>1</sup> **TITULO I - POLICIA NACIONAL - CAPITULO I - VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POLICIAL.**

**ARTÍCULO 1o. VISIÓN.** <Decreto derogado por el artículo 85 del Decreto 1512 de 2000> La Policía Nacional de Colombia será una Institución de servicio, sólida, competente, confiable, respetada, admirada y comprometida.

Sustentada en principios éticos, el talento humano, la motivación de sus hombres y los avances tecnológicos.

Que ejerza autoridad y esté integrada con la comunidad en un sistema nacional de convivencia, en procura de la seguridad y tranquilidad pública.

**ARTÍCULO 2o. MISIÓN.** <Decreto derogado por el artículo 85 del Decreto 1512 de 2000> Nuestra Misión es contribuir a la satisfacción de las necesidades de seguridad y tranquilidad pública, mediante un efectivo servicio fundamentado en la prevención, investigación y control de delitos y contravenciones, generando una cultura de solidaridad que permita a los habitantes de Colombia convivir en paz.

1DS-OF-0001

VER: 2

“...Artículo 3o. Principios. La Misión Institucional se fundamenta en los siguientes principios:

(...)

2. Contribuir al mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas...”

Por otra parte, la Corte Constitucional a propósito de lo argumentado en líneas anteriores, ha mencionado en Sentencia C – 024/94, lo siguiente:

“...en un Estado social de derecho, el uso del poder de policía -tanto administrativa como judicial-se encuentra limitado por los principios contenidos en la Constitución Política y por aquellos que derivan de la finalidad específica de la policía de mantener el orden público como condición para el libre ejercicio de las libertades democráticas. De ello se desprenden unos criterios que sirven de medida al uso de los poderes de policía. El ejercicio de la coacción de policía para fines distintos de los queridos por el ordenamiento jurídico puede constituir no sólo un problema de desviación de poder sino incluso el delito de abuso de autoridad por parte del funcionario o la autoridad administrativa”.

(...)

Esclarecido lo anterior, se procede a sustentar la oposición a cada una de las pretensiones signadas en el escrito de demanda así:

**PRETENSIÓN 4.2.1.** En la cual se aduce que se declare la falla en la prestación del servicio por parte de la **NACION - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL**, por los perjuicios morales causados al señor Armando Sánchez, como consecuencia de la demolición del inmueble ubicado en la calle 11 No. 5 – 16 del Barrio la libertad de la ciudad de Pereira el día 18 de marzo del 2022. Toda vez que dicho inmueble era un sitio de expendio y consumo de alucinógenos el cual se presentaba un foco de inseguridad para la comunidad, De lo anterior afirmación por parte del apoderado en cuanto a la responsabilidad por parte de la Policía Nacional esta defensa se opone, toda vez que si bien la institución participo en dicha demolición, su participación se ejecutó bajo los parámetros constitucional y legales en donde existió una orden por parte de la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Pereira, en realizar dicho procedimiento policial, motivo por el cual, no se puede pretender una responsabilidad por parte de mi defendida en un procedimiento donde se actúa en cumplimiento de una orden legal, es decir, en caso de haber sido así, el proceder se encuentra revestido de una causal de eximente de responsabilidad, de la cual se hablara en el acápite indicado más adelante.

➤ Perjuicios morales a la masa sucesoral de la señora Teresa Sánchez.

NOMBRE	CALIDAD FRENTE A LA VICTIMA	VALOR SOLICITADO
Teresa Sánchez	Victima directa (fallecida)	300 smlmv
Armando Sánchez	Victima directa	200 smlmv
María Leticia Guerrero Melchor	Compañera permanente de armando	100 smlmv
Carlos Andrés Sánchez Guerrero	Hijo de Armando	100 smlmv
María Camila Sánchez Obando	Nieta	100 smlmv
Luz Nancy Guerrero Melchor	Cuñada	100 smlmv

**ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS.** <Decreto derogado por el artículo 85 del Decreto 1512 de 2000> La Misión Institucional se fundamenta en los siguientes principios:

1. La gestión policial en seguridad pública, girará en torno a los intereses y necesidades del ciudadano.
2. Contribuir al mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
3. Liderar trabajos mancomunados en procesos educativos y de participación en el acatamiento y respeto a la autoridad y la ley, promoviendo la cultura de la seguridad como un compromiso de carácter colectivo.
4. Propiciar espacios participativos para adelantar una divulgación clara y oportuna sobre los derechos, garantías y deberes de que gozan las personas.
5. Adoptar la formación y el conocimiento permanente como el soporte de la proyección institucional, a fin de prestar un servicio de policía coherente con los cambios y la evolución del entorno social.
6. Consultar el entorno, los requerimientos y necesidades del ciudadano en asuntos de seguridad, como fundamento de la planificación institucional.

Valentina Guerrero Melchor	Sobrina Política	50 SMLMV
----------------------------	------------------	----------

➤ Daños a la salud por la extralimitación de funciones y falsos señalamientos.

NOMBRE	CALIDAD FRENTE A LA VICTIMA	VALOR SOLICITADO
Teresa Sánchez	Victima directa (fallecida)	300 smlmv
Armando Sánchez	Victima directa	200 smlmv
María Leticia Guerrero Melchor	Compañera permanente de armando	100 smlmv
Carlos Andrés Sánchez Guerrero	Hijo de Armando	100 smlmv
María Camila Sánchez Obando	Nieta	100 smlmv
Luz Nancy Guerrero Melchor	Cuñada	100 smlmv
Valentina Guerrero Melchor	Sobrina Política	50 SMLMV

➤ Daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados por la extralimitación de funciones y falsos señalamientos por parte de las demandadas.

A título de reparación integral solicito que las entidades accionadas:

- Publiquen en diario de amplia circulación nacional la sentencia condenatoria o el acuerdo conciliatorio.
- Realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad dentro de los hechos ocurridos el pasado 18 de marzo de 2022.
- Pidan excusas públicas a nivel nacional por los hechos ocurridos.

Con lo anterior, se busca reparar el daño ocasionado después de los falsos señalamientos que se hicieron por parte de las autoridades, generar un estado de reconciliación por parte de sus familiares; así como buscar medidas de no repetición con la población.

Teniendo en cuenta que las medidas solicitadas no son suficientes para reparar de forma integral el grupo familiar demandante y en el entendido que existe la obligación de indemnizar los daños inmateriales por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados de manera separada y al constituirse en una categoría de perjuicios según el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, solicito reconocer y pagar a favor de:

NOMBRE	CALIDAD FRENTE A LA VICTIMA	VALOR SOLICITADO
Teresa Sánchez	Victima directa (fallecida)	300 smlmv
Armando Sánchez	Victima directa	200 smlmv
María Leticia Guerrero Melchor	Compañera permanente de armando	100 smlmv
Carlos Andrés Sánchez Guerrero	Hijo de Armando	100 smlmv
María Camila Sánchez Obando	Nieta	100 smlmv
Luz Nancy Guerrero Melchor	Cuñada	100 smlmv
Valentina Guerrero Melchor	Sobrina Política	50 SMLMV

**III. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES**

Están basados o sustentados en los artículos 2 y 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991<sup>2</sup>, al respecto es procedente manifestar que para poder responsabilizar a una entidad pública por una **FALLA EN EL SERVICIO**, se requiere de la presencia de dos (2) elementos reiterados jurisprudencialmente, así:

1. **MATERIALES.** Corresponden a los que físicamente se perciben en el desenvolvimiento de los hechos; son causas inmediatas del hecho y físicamente concretan el daño y
2. **JURÍDICOS.** Son la fuente normativa de los deberes y obligaciones en los cuales se sustentan el derecho de reclamación, la declaratoria de responsabilidad y la indemnización de perjuicios” (Sentencia del 27 de noviembre de 2003, expediente 14571).

Lo expresado por el Honorable Consejo de Estado, permite dilucidar que en el *sub judice*, no se configuran los elementos sine qua non requeridos para que se pretenda responsabilizar a la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL**, como responsable de los daños y perjuicios reclamados por la accionante, más, si se tiene en cuenta, que el orgánico institucional que realizó el procedimiento, lo hizo amparado en una causal de responsabilidad que exoneran a mi defendida de toda responsabilidad, ya que el procedimiento se a línea con el cumplimiento de un deber legal, esto es, aprehensión de un rodante sobre el cual existía una orden de embargo emitida por un Juez de la República, que para el caso en litigio, se corrobora con el documento mediante el cual se dejó a disposición de la autoridad competente que lo requería (Juzgado 1 Civil del circuito de la Dorada Caldas).

#### **IV. A LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

En Relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que al parecer ocurrieron los hechos, los mismos deberán entrarse a probar dentro de éste proceso, para llenar las exigencias procedimentales del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil concordante con el 167 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 “Código General del Proceso”, así como la extralimitación de funciones endilgada a mi prohijada, y los perjuicios que se demandan, ya que el apoderado de la accionante afirma que la situación fáctica planteada en la demanda, en relación con los presuntos daños sufridos por el procedimiento institucional realizado el día 18 de marzo de 2022, es responsabilidad de mi prohijada, a lo cual manifiesto lo siguiente:

**DEL HECHO 2.1 AL 2.8:** En relación a los presentes hechos son ciertos toda vez que se pueden desvirtuar o corroborar con las documentales aportadas en el proceso verbal abreviado y los elementos materiales de pruebas allegados con la demanda.

**DEL HECHO 2.9:** En relación a lo manifestado en el presente hecho por parte del apoderado de confianza, a esta defensa no le consta toda vez que son manifestaciones subjetivas por parte de su apoderado.

**DEL HECHO 2.10:** En relación al presente hecho es cierto toda vez que se apertura una indagación preliminar bajo radicado SIED2D EE-MEPER-2022-65. Por los presentes hechos.

**DEL HECHO AL 2.11 AL 2.18:** En relación a los presentes hechos a esta defensa no le consta toda vez que en relación a las afirmaciones realizadas por parte de su apoderado de confianza, las mismas se deberán probar con elementos materiales probatorios, sin embargo hasta el momento son manifestaciones subjetivas con el fin de demostrar una falla en el servicio por parte de la entidad accionada.

**DEL HECHO 2.19:** En relación a los procesos disciplinarios y penal son ciertos toda vez que el proceso disciplinario se encuentra en etapa de instrucción, por otro lado con relación al proceso penal en donde el tribunal superior de la Justicia Penal Militar decreto una nulidad procesal el cual se dio como resultado que los seis (6) uniformados capturados recobraran su libertad.

---

<sup>2</sup> **ARTICULO 2.** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

**ARTICULO 90.** El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

**DEL HECHO 2.20 AL 2.21:** En relación al trámite de requisito de procedibilidad es cierto toda vez que se puede corroborar con las documentales allegadas con la demanda.

## **V. RAZONES DE DEFENSA**

Lo primero en advertir, corresponde a que el Constituyente Primario de 1991, estableció en la Carta Política en el artículo 90, que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos (2) elementos:

1. *El daño antijurídico y*
2. *la imputación.*

El primero, denominado **DAÑO ANTIJURÍDICO**, incorporado a nuestra legislación por la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública, o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo.

En éste orden de ideas, el daño antijurídico que pretende el demandante Armando Sánchez y otros que se le reconozca, es el relativo o causado en voces del actor, como consecuencia de la demolición del inmueble ubicado en la calle 11 No. 5 – 16 del Barrio la libertad de la ciudad de Pereira el día 18 de marzo del 2022. Toda vez que dicho inmueble era un sitio de expendio y consumo de alucinógenos el cual se presentaba un foco de inseguridad para la comunidad; De lo anterior afirmación por parte del apoderado en cuanto a la responsabilidad por parte de la Policía Nacional esta defensa se opone, toda vez que si bien la institución participo en dicha demolición, su participación se ejecutó bajo los parámetros constitucional y legales en donde existió una orden por parte de la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Pereira, en realizar dicho procedimiento policial, motivo por el cual, no se puede pretender una responsabilidad por parte de mi defendida en un procedimiento donde se actúa en cumplimiento de una orden legal, es decir, en caso de haber sido así, el proceder se encuentra revestido de una causal de eximente de responsabilidad.

Al respecto y teniendo en cuenta las funciones legales y constitucionales de la Policía Nacional, no es posible que mi defendida a través de sus funcionarios activos y en cumplimiento de la misión, función, deber y servicio a la comunidad, por haber realizado un procedimiento legal y amparado en una orden administrativa emanada del señor inspector de policía y de la secretaria de gobierno de la alcaldía de Pereira, a la cual se está obligado a dar cumplimiento, se pretenda responsabilizar a mi defendida de unos daños (materiales e inmateriales), más, sin soportarlos con las documentales conducentes, pertinentes y útiles que demuestren los hechos y la extralimitación de funciones del orgánico que realizó el procedimiento.

El segundo elemento, ha sido denominado **IMPUTACIÓN**, que no es más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión haya causado el daño. En atención a que la demandante pretende que se declare la responsabilidad de mi defendida según su pensar, al respecto es de resaltar que de conformidad con el artículo 218 de la Carta Política, el fin constitucional de la Policía Nacional es la de garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos, y como en el caso que nos ocupa, se presentó una demolición del inmueble ubicado en la calle 11 No. 5 – 16 del Barrio la libertad de la ciudad de Pereira el día 18 de marzo del 2022. Toda vez que dicho inmueble era un sitio de expendio y consumo de alucinógenos el cual se presentaba un foco de inseguridad para la comunidad, es decir, los orgánico que practicaron dicho procedimiento, solo se apegó al mandato judicial al cual está obligado a dar cumplimiento, porque de no ser así, precisamente, ahí sí estaría incurriendo en una omisión del cumplimiento de su deber legal y constitucional que reviste a los funcionarios de la Policía Nacional, ante lo cual, es claro que no se puede pretender una responsabilidad de la Entidad, por hechos que realmente fueron originados por el mismo actor, que permitió el ejecutivo que llevó a la autoridad competente a emitir la orden administrativa de realizar dicha demolición del bien inmueble.

Al respecto el Honorable Consejo de Estado en Jurisprudencia vigente relacionada con la responsabilidad extra contractual del Estado, se ha pronunciado en torno a la imputabilidad del daño señalando, así:

*“De allí que el elemento indispensable- aunque no siempre suficiente - para la imputación, es el nexo causal entre el hecho causante del daño y el daño mismo, de modo que este sea efecto del primero. Por eso, la parte última del inciso primero del artículo 90 de la C.P. en cuanto exige - en orden a deducir la responsabilidad patrimonial del estado -, que los daños antijurídicos sean “causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”, está refiriéndose al fenómeno de la imputabilidad patrimonial del Estado tanto*

*fáctica como jurídica". (Sentencia del 21 de octubre de 1999, sección 3ª expediente 10948-11643 Dr. Alíer E. Hernández).*

Dicho lo anterior, se puede constatar que los hechos narrados en la demanda en nada comprometen jurídica ni patrimonialmente a la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL**, dado que el procedimiento policial se realizó en cumplimiento a un deber constitucional y legal, esto es, una demolición del inmueble ubicado en la calle 11 No. 5 – 16 del Barrio la libertad de la ciudad de Pereira el día 18 de marzo del 2022. Toda vez que dicho inmueble era un sitio de expendio y consumo de alucinógenos el cual se presentaba un foco de inseguridad para la comunidad, tal y como ocurrió en el presente caso en litigio, como se puede corroborar con el Acta 2021-231/R-15-2021-361 correspondiente a la Audiencia Pública adelantada en el proceso verbal abreviado con radicado 153-2021233 por demolición de inmueble por amenaza de ruina consideró el Inspector de Policía que la situación en que se encontraba el inmueble ubicado en la calle 11 #5-16 de Pereira-Risaralda, estaba demostrada, sin que en ello se configure alguna extralimitación en las funciones por parte del institucional que realizó el procedimiento.

Con el ánimo de dejar clara la responsabilidad de los hechos que se presentaron de manera externa a la Policía Nacional, es importante advertir, que todo servidor público está llamado a respetar la Constitución, la Ley, los Reglamentos y demás ordenamientos jurídicos, es decir, se debe ser ejemplo ante las demás personas, ciudadanos, habitantes, comunidad y sociedad en general, más no entrar en violación o transgresión a la normatividad jurídica vigente, lo cual y atendiendo la documental (acta de audiencia que ordena la demolición del bien), se prueba que el procedimiento aplicado en nada infringe mandato constitucional o legal alguno, por el contrario, es la parte actora quien pretende trasladar su responsabilidad que le generó la demolición del bien inmueble, a los funcionarios de la Institución, quienes solamente dieron cumplimiento al mandato de las autoridades administrativas vigente para realizar u ordenar la demolición del bien inmueble.

Por otra parte, es importante reiterar su señoría, que el procedimiento institucional relacionado por el funcionario que se refiere en el escrito de la demanda, obedeció al cumplimiento de un deber legal relacionado con una orden de demolición del bien inmueble, que en su momento presentaba requerimiento del señor Inspector de Policía, esto teniendo en cuenta, los argumentos esbozados y sustentados en el acta 2021-231/R-15-2021-361 correspondiente a la Audiencia Pública adelantada en el proceso verbal abreviado con radicado 153-2021233, sin que ello sea causal de responsabilidad o extralimitación en las funciones de quien realizó el procedimiento para éstos casos, que dicho sea de paso, procede la demolición del bien inmueble, siendo así; el procedimiento devino de una orden administrativa, esto es, la orden de demolición del bien inmueble, lo cual recae directamente sobre quien realizó las razones de mérito suficiente para ordenar dicha demolición y aún más siendo avalando dicha decisión con los elementos de pruebas allegadas al proceso abreviado policivo que conllevaron ordenar la demolición.

Finalmente, provechoso para la decisión que adoptará su señoría, es poner en su conocimiento, que se argumentan y se hacen señalamientos contra mi defendida respecto a presuntas omisiones y extralimitaciones en el actuar del funcionario que realizó el procedimiento ampliamente referido contra demolición del inmueble ubicado en la calle 11 No. 5 – 16 del Barrio la libertad de la ciudad de Pereira el día 18 de marzo del 2022, pero no se allega prueba por lo menos sumaria que corrobore tales razonamientos, como por ejemplo fotocopias de:

1. *la orden de comparendo realizado al rodante,*
2. *el documento que soporte la inmovilización del mismo,*
3. *el escrito del recurso o actuación administrativa que se dice recurrió la orden de embargo y demás.*

Es decir, solo se menciona y se dice que en el proceder de los uniformados de ejecutar la demolición del inmueble ubicado en la calle 11 No. 5 – 16 del Barrio la libertad de la ciudad de Pereira el día 18 de marzo del 2022, y demás manifestaciones que carecen de material probatorio, mediante los cuales se demuestren las argumentaciones realizadas contra mi defendida, porque lo obrante en el plenario, solo se da certeza que los funcionarios cumplieron con la orden administrativa solicitada por el señor inspector de policía de la alcaldía de Pereira, lo cual por ende, demuestra lo contrario a lo relatado por el demandante, bajo el entendido que los policías señalados dieron cumplimiento al mandato constitucional y la ley que están en la obligación de cumplir, esto es, ante una orden administrativa de demolición de bien inmueble el cual se dio cumplimiento el día 18 de marzo de 2022, tal y como ocurrió en el presente caso, razones por las cuales no existe ningún tipo de omisión o extralimitación de funciones por parte de quien dio aplicación al procedimiento, quedando así, desvirtuado de pleno lo pretendido por el demandante.

## **VI. EXCEPCIONES PREVIAS.**

## **ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL Y MANDAMIENTO ESCRITO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVAS COMPETENTE EMITIDO CON LAS FORMALIDADES LEGALES:**

Es perfectamente claro, que los uniformados policiales señalado en el escrito de la demanda como responsable de practicar el procedimiento de demolición del bien inmueble de propiedad del demandante Armando Sánchez, realizó el procedimiento legal y actuó en cumplimiento de una orden de autoridad administrativa competente emitida con las formalidades legales (Inspector de policía de la alcaldía de Pereira), al cual mediante acta 2021-231/R-15-2021-361 correspondiente a la Audiencia Pública adelantada en el proceso verbal abreviado con radicado 153-2021233, ordeno llevar a cabo dicha demolición, solicitando el acompañamiento policivo y ejecutando en debida forma y sobre las que no emerge reproche en la demanda.

## **FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA:**

La Policía Nacional no está llamada a responder de manera patrimonial o extra patrimonialmente, siendo prudente solicitar a su Honorable Despacho, se sirva decretar en favor de la Institución **“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”**, pues se advierte en primer lugar, que el procedimiento realizado por el orgánico de la Institución, se llevó a cabo por el requerimiento administrativo con la demolición del bien inmueble ubicado en la calle 11 No. 5 – 16 del Barrio la libertad de la ciudad de Pereira el día 18 de marzo del 2022, el cual se trataba de una orden administrativa en un proceso verbal abreviado por parte de la alcaldía de Pereira, es decir, referido proceder desde ningún punto de vista genera daños como los pretendidos por la parte actora.

## **HECHO DETERMINANTE DE UN TERCERO:**

Se desvirtúan las pretensiones de la parte actora respecto a mi defendida, **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL**, toda vez, que el procedimiento realizado por los miembros de la institución, como se ha referido, se realizó por el requerimiento administrativo que ordeno el inspector de la alcaldía de Pereira, que pesaba con ejecución de demolición del bien inmueble ubicado en la calle 11 No. 5 – 16 del Barrio la libertad de la ciudad de Pereira el día 18 de marzo del 2022, es decir, el procedimiento demandado se debió al cumplimiento de un deber legal y constitucional que emitió un tercero, para el caso en litigio, se trató del señor inspector de la alcaldía de Pereira, autoridad totalmente diferente e independiente de la Policía Nacional.

## **IMPROCEDENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO:**

De acuerdo al **CONCEPTO No. 0001/2012** de la Procuraduría General de la Nación, en concordancia con lo expuesto en varias oportunidades por el Consejo de Estado, se afirma lo siguiente:

*“La responsabilidad en materia contractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política.*

*Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos:*

*“a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima a la administración.*

*b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluye los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano.*

*c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. Con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.*

*d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...”*

De acuerdo a los presupuestos expuestos por el Consejo de Estado, aceptados por la Procuraduría General de la Nación, encontramos que en el caso concreto a la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL**, no le asiste falla en el servicio ni por acción, ni por omisión y mucho menos por extralimitación de funciones, puesto que como se ha expuesto, el procedimiento realizado por el orgánico institucional nombrado en el escrito de la demanda,

se debió a una orden de demolición del bien inmueble por autoridad administrativa competente para ello, lo cual conllevó a la aplicación del procedimiento de demolición en un proceso verbal abreviado, ordenado mediante acta 2021-231/R-15-2021-361 correspondiente a la Audiencia Pública adelantada en el proceso verbal abreviado con radicado 153-2021233, por la inspección de policía de la alcaldía de Pereira; razón por la cual no le asiste a mi defendida ninguna **FALLA EN EL SERVICIO**.

**VII. PRUEBAS**

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 175 del C.P.A.C.A, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a la Honorable Juez tenga a bien tener en cuenta las siguientes pruebas (en la calidad que la ley les otorgue).

Respetuosamente me permito solicitar a la Honorable Juez, se decreten las pruebas que fueron solicitadas:

- Mediante comunicación oficial GS-2024-023370-SEGEN del 26 de agosto de 2024 dirigidas a la señora coronel RUTH ALEXANDRA DIAZ GOMEZ, Comandante Policía Metropolitana, se solicita allegar el expediente disciplinario con radicado SIE2D EE-MEPER-2022- 65 en contra de los señores policiales CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ, CESAR ALFONSO BOHORQUEZ, WILMAR DELGADO HERRERA, HECTOR JULIAN BOTERO SANCHEZ, JARRIXON PERALTA SANCHEZ Y RUTBER VEGA RAMIREZ. (...)"
- Mediante comunicación oficial GS-2024-023372-SEGEN del 26 de agosto de 2024 dirigidas al doctor FABIO ESPITIA GARZON Director Ejecución de la Justicia Penal Militar, se solicita allegar el expediente con radicado No. 54 al Juzgado 167 de Instrucción penal militar y policial, en contra de los señores policiales CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ, CESAR ALFONSO BOHORQUEZ, WILMAR DELGADO HERRERA, HECTOR JULIAN BOTERO SANCHEZ, JARRIXON PERALTA SANCHEZ Y RUTBER VEGA RAMIREZ (...)"

**VIII. PERSONERIA**

Solicito al señor Juez, por favor se sirva reconocermé personería de acuerdo al poder otorgado por el señor Secretario General de la Policía Nacional y los anexos que lo sustentan.


**IX. ANEXOS**

Me permito allegar el poder legalmente conferido por el Secretario General de la Policía Nacional y sus anexos.

**X. NOTIFICACIONES**

Las recibo en la carrera 59 No. 26 – 21, Piso 3°, correo electrónico: [decun.notificacion@policia.gov.co](mailto:decun.notificacion@policia.gov.co), y [edwin.aparicio1553@correo.policia.gov.co](mailto:edwin.aparicio1553@correo.policia.gov.co).

Atentamente,



**EDWIN SAUL APARICIO SUAREZ**  
C. C. No. 1.090.389.916 de Cúcuta  
T. P. No. 319.112 del C.S.J  
Celular 3045230567

Carrera 59 # 26-21 CAN, Bogotá  
[decun.notificacion@policia.gov.co](mailto:decun.notificacion@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)